

Análisis de
coyuntura

Triunfalismo y contención en medio de la crisis

IPNUSAC

A contrapelo del discurso gubernamental, forzosamente optimista, la primera quincena de octubre siguió marcada por la fuerte incidencia de la pandemia del COVID-19 y el continuado deterioro de la institucionalidad pública, especialmente focalizado en el sector justicia. En este se cumplió un año sin que se produjera el relevo constitucionalmente establecido para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones (CA), acentuándose paralelamente, también la cada vez más desembozada lucha en torno a la Corte de Constitucionalidad (CC), aquejada por vacantes en las magistraturas y disputas en torno a las condiciones de su integración. Entretanto, el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se encuentra en una especie de valle de bajo perfil sin haber superado del todo la tormenta en torno al Centro de Gobierno y, al mismo tiempo, apuntándose la contención exitosa de una caravana migrante que puede significarle réditos en sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos.

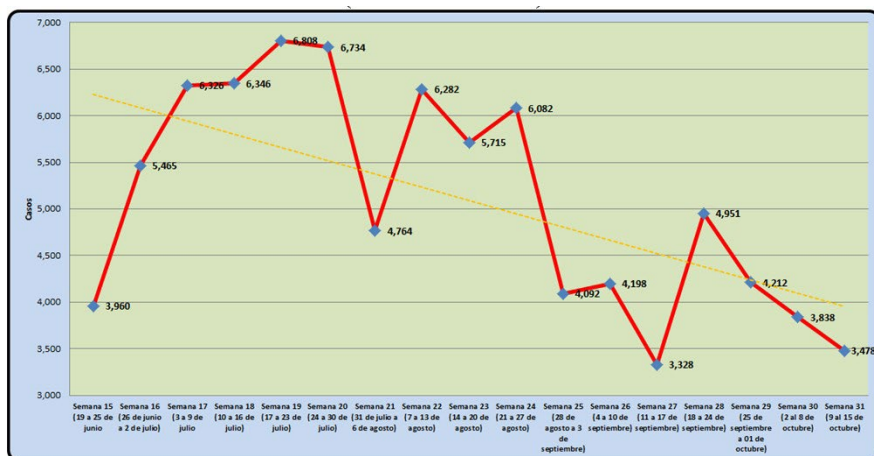
Mensajes contradictorios

En contraste con el gran despliegue mediático observado al inicio de la epidemia de la COVID-19 en Guatemala (que el 13 octubre ajustó siete meses) y a pesar de

que el nivel del contagio sigue siendo alto, para el gobierno de Giammattei la pandemia dejó de ser el tema principal de su agenda pública. Como puede verse en la gráfica 1, si bien se mantiene la tendencia a la reducción de casos observada desde principios de agosto, el número de personas

infectadas se mantiene –hacia la semana 31 desde que se detectó el primer caso– por encima de tres mil contagios detectados de forma oficial semanalmente.

Gráfica 1
Casos semanales de covid-19 registrados oficialmente
(Semana 15 a la 31)



Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

En su afán de bajar importancia al que, objetivamente, sigue siendo el problema mayor en el país, Giammattei envía mensajes contradictorios a la ciudadanía. Como se analizó en nuestra edición anterior, el gobierno se vio impelido a no acudir al Congreso

de la República para solicitar la prolongación del estado de Calamidad pública¹ y, como resultado, desde el 1 de octubre se oficializó la “apertura” e inició la llamada “nueva normalidad”. Como se ha dicho, no fueron razones sanitarias las determinan-

1. “Reapertura forzada... por la debilidad”, Revista Análisis de la Realidad Nacional, edición No.193, 16 al 30 de septiembre de 2020. Págs. 8-15. Accesible en <http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/10/IPN-RD-193.pdf>

tes del levantamiento del estado de excepción.

El análisis del momento epidemiológico, a la luz de las cifras oficiales, sugiere que la situación de emergencia no se ha superado. Y el balance, al 15 de octubre – cuando se cumplió la semana 31 desde el inicio de los contagios en el país– no es precisamente tranquilizador: 100 mil 430 casos oficialmente registrados, y tres mil 478 fallecidos oficialmente reconocidos como víctimas de COVID-19

De acuerdo con la valoración de una fuente no gubernamental – Laboratorio de Datos GT–

la curva [de contagios] sigue en meseta... En los últimos 14 días (2-15oct) a nivel nacional todavía se registraron 7,327 casos nuevos; 103 fallecidos; positividad de 15%. Departamentos como Sololá mantiene positividad de 32%; San Marcos 29%; Petén 22%; Chiquimula 24%. En cuanto a pruebas, todavía no hay cobertura suficiente: Los tamizados por fecha de toma de muestra dejan ver que en Guatemala se realizan

en promedio 3,000 pruebas diarias. La capacidad de testeo no ha aumentado significativamente desde julio. La cantidad de PCR se mantiene ~5,000 semanales. Esta es una gran limitante para el control de la epidemia: Baja capacidad de testeo->sub-registro. Mayoría de pruebas son antígeno->falsos negativos. Estimamos que solo por falsos negativos, se han dejado de registrar más de 50,000 casos. Eso nos lleva a más de 150,000 casos hoy.²

En efecto, una de las grandes interrogantes –no solamente en Guatemala sino también en otros muchos países– es la relativa a la magnitud real del contagio. Edwin Asturias, director de la Comisión Presidencial para Atención a la Emergencia del COVID-19 (COPRECOVID), volvió sobre el asunto el 13 de octubre, estimando que el número real de contagiados podría ser entre cinco y diez veces mayor al reportado. A esa conclusión se puede llegar, por lo menos en el área metropolitana de la ciudad de Guatemala, luego de un estudio serológico realizado en gimnasios capitalinos y de municipios aledaños:

2. Véase: <https://twitter.com/labdatosgt/status/1317162831805140993?s=09>

“Asturias indicó que, según los resultados del estudio, 1 de cada 9 guatemaltecos en el área metropolitana podrían haber tenido ya el coronavirus”, según le citó el diario *Prensa Libre*.³

Además, comparativamente con otros países de la región centroamericana, Guatemala sigue situada entre aquellos que tienen

peores resultados, como puede apreciarse en la siguiente tabla. En cifras absolutas, Guatemala tiene el primer lugar por el número de decesos, a pesar de que ocupa el segundo lugar por casos confirmados, en tanto que tiene también el segundo lugar regional por la letalidad del contagio, levemente por debajo de Nicaragua.

Tabla 1
Casos confirmados y fallecidos por covid-19

País	Casos confirmados	Fallecidos	Letalidad (%)
Belice	2,619	40	1.52
Costa Rica	91,780	1,134	1.23
El Salvador	31,061	908	2.92
Guatemala	99,765	3,453	3.46
Honduras	85,458	2,533	2.96
Nicaragua	4,297	154	3.58
Panamá	122,128	2,533	2.07

Fuente: elaboración propia con datos del SICA, al 14 de octubre de 2020.
<https://sigportal.sica.int/portal/apps/opsdashboard/index.html#/fe36accd-453346809beac7a955831b8e>

Como se ha visto, la situación sanitaria está lejos de haber superado la emergencia, pero el gobierno de Giammattei se afina en la idea de que el

país debe prepararse para una inminente “segunda ola”, dando a entender que “la primera ola” ya habría pasado. El propio gobernante –quien el 4 de

3. “Edwin Asturias: el número de casos de coronavirus que tenemos es de 5 a 10 veces mayor”, *Prensa Libre*, 13 de octubre de 2020. Véase en <https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/edwin-asturias-el-numero-de-casos-de-coronavirus-que-tenemos-es-de-5-a-10-veces-mayor/>

octubre, en cadena nacional de radio y televisión anunció haberse recuperado del contagio al que dio positivo— acusó a “irresponsables” de ser los eventuales causantes de esa “segunda ola”.⁴ Y volvió con ese argumento para advertir que “nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos ni debemos cerrar el país. No podemos perder esta libertad con responsabilidad que hemos recuperado”, aseguró el gobernante el 8 de octubre.⁵

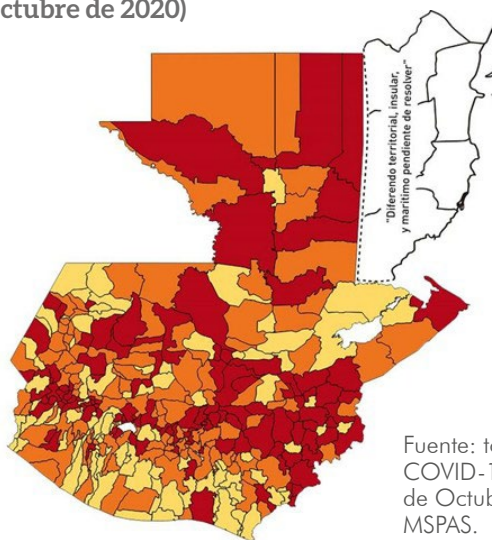
Nominalmente las actividades económicas, sociales, culturales y religiosas se rigen en los 340 municipios del país por el sistema de tableros de contagio, pero la impresión generalizada es que —salvo en ámbitos muy visibles, como el transporte público o

los accesos a grandes centros comerciales— la observancia de las normativas sanitarias se está haciendo cada vez más laxa. De acuerdo con los registros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en el período del 2 al 15 de octubre solamente 97 municipios se encontraban en alerta amarilla (la más baja), 121 se situaron en alerta naranja (intermedia), mientras que los 122 restantes permanecía en el grado máximo de alerta (rojo). El resultado es la imagen de un país que sigue infestado (mapa 1), pero entregado de lleno a un proceso inercial de “reapertura”, sin que la observancia de las normas preventivas tenga más recursos que los de la disciplina y la responsabilidad sociales.

4. “Giammattei convocó a Gabinete por la ‘gente irresponsable’”. Soy 502, 6 de octubre de 2020. Véase en <https://www.soy502.com/articulo/giammattei-convoco-gabinete-gente-irresponsable-100931>

5. “ ‘Nuestra economía no soportaría un segundo cierre’: El llamado de Giammattei ante la segunda ola de contagios de coronavirus”, Prensa Libre, 8 de octubre de 2020. Véase en <https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/no-podemos-ni-debemos-cerrar-el-pais-el-llamado-de-giammattei-ante-la-segunda-ola-de-contagios-de-coronavirus-breaking/>

Mapa 1
Diseminación del covid-19
Según el grado de alerta por municipio
(Período del 2 al 15 de octubre de 2020)



Fuente: tomado de Registros COVID-19, del 02 al 15 de Octubre del año 2020, MSPAS.

La contención de los migrantes

Durante el período del que se ocupa este análisis, el gobierno

de Giammattei no solamente se dedicó a contener la epidemia del nuevo coronavirus, también se aplicó diligente a contener la segunda caravana masiva del año⁶ de emigrantes hondureños

6. La primera caravana hondureña en 2020 ocurrió entre el 14 y el 16 de enero, cuando Giammattei apenas ajustaba las primeras 48 horas de haber asumido la presidencia; en realidad el operativo de contención correspondió a las autoridades salientes, las cuales contaron con el apoyo activo de asesores de la oficina de inmigración y aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Así lo confirmó un informe del comité de Relaciones Internacionales del Senado de EE.UU., divulgado el 13 de octubre. Véase "La "redada" de ICE [en Guatemala]", en <http://www.univisionminnesota.com/la-redada-de-ice-en-guatemala/>; también puede consultarse "Agentes de Estados Unidos ejecutaron una operación irregular en Guatemala contra migrantes de Honduras", diario El País (España) en <https://elpais.com/internacional/2020-10-13/agentes-de-estados-unidos-ejecutaron-una-operacion-irregular-en-guatemala-contra-migrantes-de-honduras.html>

que pretendían atravesar el territorio guatemalteco, llegar a México y luego seguir hacia Estados Unidos. A diferencia de lo ocurrido en enero, en esta ocasión el gobernante se apresuró a decretar el estado de Prevención en seis departamentos (Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula) a partir del 2 de octubre y durante 15 días.

Esta medida de emergencia, la menos drástica de las previstas en la Ley de Orden Público, permitió desplegar contingentes policiales y militares a la largo de las rutas por las que se desplazaban los hondureños. En al menos un caso hubo enfrentamientos entre migrantes y fuerzas policiales, cuyo objetivo era disuadirlos de continuar la marcha y “convencerlos” de abordar autobuses que los conducirían de regreso a la frontera entre Guatemala y su país. Aunque ninguna autoridad guatemalteca hizo un balance definitivo de cuántos hondureños “retornaron voluntariamente” en los buses facilitados por el gobierno, se

estima que entre dos mil 500 y tres mil 500 personas fueron retornadas. Hacia el 3 de octubre el Instituto Guatemalteco de Migración contabilizaba dos mil 159 retornados.⁷

Adicionalmente, la caravana de migrantes hondureños y su tratamiento por parte de las autoridades guatemaltecas, dio lugar a roces diplomáticos entre los dos países, luego de que la cancillería de Guatemala acusara a las autoridades de Honduras de negarse a facilitar los procesos de retorno. Mientras que del norte –de México y EE.UU. – llegaron señales de beneplácito por la barrera policial-militar que terminó disolviendo la caravana. En una de sus conferencias de prensa matutinas el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a los gobierno de Honduras y Guatemala por haberse puesto de acuerdo para frenar la caravana.⁸ Y, desde Washington, Michael Kozak, subsecretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, a través de Twitter, agradeció a Giammattei por “los

7. “IGM: 2 mil 159 migrantes hondureños regresan a su país”, Diario La Hora, 3 de octubre de 2020. Véase en <https://lahora.gt/igm-2-mil-159-migrantes-hondurenos-regresan-a-su-pais/>

8. “López Obrador aplaude que Guatemala y Honduras lograsen “convencer” a los migrantes de la ‘caravana’”. Europapress, 5 de octubre de 2020. Véase en <https://www.europapress.es/internacional/noticia-lopez-obrador-aplaude-guatemala-honduras-lograsen-convencer-migrantes-caravana-20201005165155.html>

constantemente esfuerzos para reducir la propagación del COVID-19 y frenar la migración irregular”. Como se recordará, semanas atrás, el mismo Kozak había presionado al gobernante para propiciar la elección de los magistrados de la CSJ, pero ahora le muestra la zanahoria diplomática y le asegura que EE. UU. “está comprometido a continuar trabajando con sus socios para salvar vidas y proteger la salud”.⁹

La otra contención

En medio de los sobresaltos por la COVID-19, la manipulación mediática y el uso de la fuerza, casi xenófoba, contra los migrantes hondureños, para la mayoría de guatemaltecos siguió pasando desapercibida la profundidad de la crisis política e institucional. Para el gobierno de Giammattei, por lo pronto, ambos asuntos resultaron funcionales para lanzar un manto de olvido sobre sus más recientes tropiezos, que continúan latentes. Nos referimos al cuestionamiento de la existencia del Centro de Gobierno, y el afloramiento público de la ruptura entre Giammattei y el vicepre-

sidente Guillermo Castillo. En ambos casos se aplica una clara política de “control de daños”, esto es, de lo que aquí llamamos “otra contención”.¹⁰

Pero donde más perniciosa resulta esa línea de “contención” es en el sector justicia, el cual ahora tiene dos claros focos de una misma disputa en torno a la independencia y la credibilidad del sistema judicial.

El primero de esos focos se refiere a la postergada elección de los nuevos magistrados de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones. En este punto el protagonismo lo sigue teniendo el Congreso de la República, donde la mayoría oficialista continúa maniobrando para no concretar en las plenarios el inicio de la votación según lo establece una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Disfrazada como un problema de “agenda legislativa”, se trata de una desobediencia que altera por partida doble la endeble constitucionalidad del país. De una parte, desafía y desobedece a la CC, que carece de fuerza material

9. Véase <https://twitter.com/usembassyguate/status/1312535849867698176>

10. Sobre la controversia por el Centro de Gobierno véase nuestro análisis en la edición 192 de Revista Análisis de la Realidad Nacional (en <http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2020/09/IPN-RD-192.pdf>), y sobre la ruptura entre Giammattei y Casillo, la ya citada edición 193.

para hacer que se cumpla con una de sus órdenes. Y, por otra parte, se prolonga de mes en mes una situación de provisionalidad de una CSJ y unas CA cuyos magistrados debieron ser relevados hace ya un año.

Ambas anomalías o desajustes constitucionales se han visto favorecidos, en semanas recientes, por el progresivo debilitamiento de que ha sido víctima la misma CC. Debilitamiento en cuanto contra ella se han coludido, abierta o solapadamente, diversos actores –políticos y empresariales, principalmente– inconformes con algunas de sus resoluciones.

Llevada a los límites de la obcecación, la alianza anti CC se ha montado en el inverosímil discurso de que el tribunal constitucional está dominado por “la izquierda” y por eso se trata de forzar su recomposición. Primero fue con un fallido intento de desaforar a tres magistrados, y ahora en torno a las vacantes acumuladas a lo largo de varios años, la más reciente de las cuales fue el fallecimiento –víctima de COVID-19– del magistrado Bonerge Mejía. A ella se agrega la vacante temporal –también por razones de salud– del magistrado Neftaly Aldana.

En torno a este último y sobre su eventual separación definitiva de la CC se ha instalado un debate público –rayano en lo irrespetuoso– que trasciende al interés real sobre la situación de Aldana y se ha contaminado totalmente por la polarización a la que han dado lugar esos actores coludidos contra el tribunal constitucional. Tres magistrados –una titular y dos suplentes– se sumaron a ese juego y condicionaron su participación en los trabajos de la CC a la resolución de las vacantes, aduciendo que el tribunal está “desintegrado”. Esto ha creado un impasse funcional, muy conveniente para asuntos de alta sensibilidad, como dos acciones de inconstitucionalidad dirigidos en contra del Centro de Gobierno.

Hasta dónde se llevará la erosión de la CC, si es solamente una forma táctica de esta “otra contención” o si hay la pretensión de paralizarla por los siguientes cinco o seis meses que le queda a su actual integración, son preguntas de difícil respuesta, que por lo pronto caen en el campo de la especulación. Pero lo que si queda claro es que esta crisis artificial de la CC forma parte ya de una nueva vuelta de tuerca en el, al parecer, incontenible proceso de desinstitucionalización que vive el país.